

Distr.
GENERAL

CCPR/C/SR.1160
2 de noviembre de 1992

ESPAÑOL
Original: FRANCES

COMITE DE DERECHOS HUMANOS

45º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA PRIMERA PARTE* (PUBLICA)

DE LA 1160a. SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el martes 21 de julio de 1992, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. POCAR
más tarde, Sr. AGUILAR URBINA

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del
artículo 40 del Pacto (continuación)

Segundo informe periódico del Perú (continuación)

* El acta resumida de la segunda parte (privada) de la sesión lleva la
signatura CCPR/C/SR.1160/Add.1.

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo.
Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además,
incorporarse a un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse,
dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento,
a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio
de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un
documento único que se publicará poco después de la clausura del período de
sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 40 DEL PACTO (tema 4 del programa) (continuación)

Segundo informe periódico del Perú (CCPR/C/51/Add.4, 5 y 6)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a reanudar el examen del segundo informe periódico del Perú (CCPR/C/51/Add.4, 5 y 6) y concede la palabra a la delegación peruana, para hacer una aclaración.
2. La Sra. LINARES ARENAZA (Perú), responde a la pregunta del Sr. Wennergren sobre un magistrado, el Sr. Escobar Piñeda, que podría haber sido asesinado, y dice que esta persona salió del país para ir a los Estados Unidos por haber recibido unas supuestas amenazas de muerte. Según las últimas informaciones del Ministerio de Defensa y el ministerio público del Perú, no se ha comprobado que el Sr. Carlos Escobar Piñeda hubiese recibido realmente amenazas de muerte. Se trasladó a los Estados Unidos, primero, de vacaciones. Cuando debería haberse reincorporado a su puesto de fiscal en Lima, envió un certificado médico y solicitó una licencia por enfermedad para poder seguir un tratamiento en ese país. El ministerio público le pidió que regresara para volver a desempeñar sus funciones y ocuparse especialmente de los casos de las personas desaparecidas en Lima. Desde los Estados Unidos el Sr. Escobar Piñeda envió una carta de renuncia, renuncia que no le fue aceptada por el ministerio público. Para terminar la Sra. Linares Arenaza declara que no se han podido probar nunca las alegaciones del Sr. Escobar Piñeda.
3. El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que comuniquen sus observaciones y conclusiones respecto del segundo informe periódico del Perú que se está examinando (CCPR/C/51/Add.4, 5 y 6).
4. El Sr. PRADO VALLEJO agradece a las dos delegaciones peruanas que han estado presentes en Nueva York y en Ginebra, respectivamente, la franqueza de sus contestaciones y la buena voluntad de que hicieron gala durante el examen del segundo informe periódico (CCPR/C/51/Add.4, 5 y 6). Su posición era difícil, porque no disponían probablemente de los elementos necesarios para aportar una respuesta satisfactoria a todas las preguntas relativas a las violaciones de los derechos humanos en el Perú; por lo que hace al actual período de sesiones, la delegación peruana ha desarrollado muy bien su tarea, haciendo todo lo posible para colmar las lagunas del segundo informe periódico y de las informaciones complementarias. Es verdad que los documentos escritos no transmiten una imagen exacta de la triste y dolorosa realidad del Perú en materia de los derechos humanos. Nada dicen de las medidas tomadas por el Gobierno para velar por el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto, ni tampoco de las dificultades encontradas en ese contexto. Además, da la impresión de que la Constitución no está realmente en vigor y persiste una gran incertidumbre en cuanto a la situación jurídica de las instituciones.
5. Por lo que se refiere a las cuestiones de fondo, en general no se han aclarado lo suficiente y siguen existiendo motivos de preocupación, sobre todo a causa de las consecuencias de la impunidad de los miembros de las fuerzas de

seguridad que cometen delitos. No se ha realizado prácticamente ninguna investigación acerca de los delitos cometidos por militares, especialmente allí donde rige el estado de emergencia y donde el poder de las fuerzas armadas es absoluto y se cometen los mayores atropellos de los derechos humanos. En estas regiones, que representan más de la mitad del territorio nacional, las autoridades militares detienen y juzgan a los civiles y, aparentemente, el poder central no ejerce su autoridad.

6. De diversas fuentes ha llegado la consigna lanzada por el Ministerio de Defensa a los miembros de las fuerzas armadas, que pretende fomentar las ejecuciones de aquellas personas que hubiesen llevado a cabo actos de subversión. Las autoridades han afirmado que no se trata de un documento oficial, pero evidentemente refleja el espíritu que anima a las fuerzas de seguridad. Es verdad que Sendero Luminoso y los otros grupos subversivos, como por ejemplo el grupo Tupac Amaru, cometen crímenes que pueden llegar al genocidio y otros delitos abominables que exigen la aplicación estricta de la ley. Pero esto no autoriza a las fuerzas del orden a convertirse a su vez en autoras de crímenes y violencias. Como ha dicho el Sr. Sadi, el terrorismo no puede justificar el ejercicio de un terrorismo de Estado. Por otra parte, contrariamente a lo que deja entender el párrafo 9 del documento CCPR/C/51/Add.6, las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos no sólo se preocupan de las violaciones de los derechos humanos que afectan a las personas que pertenecen a organizaciones terroristas, sino que toman también en consideración las dos formas de violencia, la de los opositores al régimen y la de las fuerzas del orden. El Sr. Prado Vallejo recuerda que se han confirmado 169 ejecuciones sumarias bajo la presidencia del Sr. Fujimori. Ahora bien, estos casos no han dado lugar a ninguna investigación, y los culpables no han sido castigados. Es evidente que el Gobierno actual, como el precedente, no controla a las fuerzas del orden y el ejército. El Presidente Fujimori es un civil, que sin duda alguna busca el bien de su país y desearía garantizar el respeto de los derechos humanos. Pero la realidad es muy distinta, y a diario siguen cometiéndose graves violaciones de los derechos humanos. Miles de personas han desaparecido, sin haber sido siquiera detenidas. A este respecto, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha hecho alusión en un reciente informe a la tragedia que se desarrolla en las zonas en que sigue vigente el estado de emergencia y que están bajo el control de las autoridades militares. El Grupo elaboró al respecto una serie de recomendaciones que no han sido aplicadas por el Gobierno. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han empezado a recibir denuncias relativas a grupos de campesinos que han sido, al parecer, prácticamente exterminados en el marco de enfrentamientos con las milicias rurales. Estas, respaldadas por el ejército, sobre todo desde el punto de vista logístico, están compuestas por campesinos, que luchan por consiguiente contra otros campesinos, y así es como se constituye uno de los engranajes de la violencia en el Perú.

7. Por lo que respecta a la cuestión de los registros de detenidos, es evidente que, en general, las fuerzas armadas se niegan a facilitar información sobre las personas que han arrestado o detenido. A menudo transcurre un plazo de seis a ocho meses antes de obtener información sobre un

familiar, y ni siquiera se respetan las decisiones del Presidente Fujimori al respecto. Además, la ayuda concedida por los Estados Unidos de América para la elaboración de esos registros fue suspendida a partir del 5 de abril.

8. Y para terminar, el Sr. Prado Vallejo reafirma su inquietud ante una situación insostenible de violencia generalizada, caracterizada por graves atropellos de los derechos y libertades consagrados en el Pacto. El desmoronamiento del sistema democrático producido el 5 de abril pasado en el Perú es muy grave para el resto de América Latina, porque puede sentar en el continente un precedente peligroso.

9. El Sr. WENNERGREN se congratula del diálogo tan profundo e interesante mantenido con la delegación peruana no sólo en Nueva York sino también en Ginebra, y le da las gracias por su cooperación. También agradece las informaciones que presentó sobre el asunto del magistrado Escobar Piñeda. Sin embargo, sigue habiendo demasiados elementos oscuros y demasiadas preguntas que han quedado sin respuesta para que el diálogo haya sido realmente fructífero, y eso pese a las múltiples aclaraciones amablemente ofrecidas por la delegación peruana. Los derechos reconocidos en el Pacto no están garantizados tal y como es menester y sería importante saber por qué. Gran parte de la culpa es imputable al terrorismo practicado por Sendero Luminoso y al movimiento Tupac Amaru, pero no explica totalmente la situación.

10. Al Sr. Wennergren le preocupa que ninguna disposición legal, recogida en la Constitución o en cualquier otro texto legislativo, autorice las medidas tomadas el 5 de abril pasado, especialmente la disolución del Parlamento y la detención de medio centenar de personalidades influyentes. La decisión de disolver el Parlamento, sólo estuvo dictada, al parecer, por el principio de necesidad, que hace caso omiso de la legalidad, como todo el mundo sabe. Es verdad que la mayoría de los sistemas jurídicos reconocen el principio de necesidad, pero en el sentido estricto del término. En el caso del Perú es difícil considerar que el principio justificaba la decisión adoptada el 5 de abril. Por lo que hace a la detención de diversas personalidades, carece evidentemente de todo fundamento legal y, para justificarla sólo se invocaron vagos intereses de Estado. Ya antes del 5 de abril las autoridades peruanas tampoco estaban en condiciones de aplicar las disposiciones del Pacto en muchos aspectos. Se habían ordenado muy pocas indagaciones sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones, de malos tratos o de torturas. En general, parecería que el Perú no reúne todavía los requisitos indispensables para cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto. Si bien es una situación comprensible debido al terrorismo que azota al país, resulta, sin embargo, muy lamentable. Las circunstancias cambiaron a partir del 5 de abril de 1992, fecha que marca el comienzo de una especie de compás de espera. El principio de necesidad que parecen invocar las autoridades no significa que el Estado deba ponerse fuera de la ley. Las medidas tomadas el 5 de abril suscitaron nuevas incertidumbres en torno a la protección de los derechos y el respeto de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto. El paréntesis que se abrió en la primavera pasada debería ser lo más breve posible, para no menoscabar la confianza del país en los valores del derecho. Y es de esperar que, más adelante, una vez que se haya cerrado este episodio, el Estado se dedique enérgicamente a cumplir la ley y a promover los derechos humanos.

11. La Sra. CHANET agradece a las delegaciones peruanas presentes en Nueva York y en Ginebra la buena voluntad de que dieron prueba, ya que, evidentemente, su posición no era nada fácil. Desgraciadamente siguen sin respuesta demasiadas preguntas. Pese a ello, gracias al debate, el Comité ha podido recibir algunas informaciones útiles. En realidad el Perú vive en un clima de violencia inusitada desde hace más de diez años. Hay discrepancias entre los datos sobre la cantidad de personas desaparecidas, pero no cabe duda de que es muy elevada; además, son frecuentes las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de torturas que afectan a muchas personas. Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru son culpables de estas violencias, pero también lo son las fuerzas del orden y los diferentes grupos paramilitares. En 1991 los medios de difusión divulgaron un documento secreto de las fuerzas armadas en el que se recomendaba a los militares que utilizaran el procedimiento de la ejecución sumaria, sin dejar huellas, y que no hicieran prisioneros. El Ministro de Defensa reconoció la existencia de este documento, pero puntualizó que no había sido respaldado por el Comandante en Jefe. A la Sra. Chanet le preocupa en gran medida, sin embargo, la posibilidad de que si los militares recibieron efectivamente esas instrucciones las pusieran en práctica. La oradora deplora que el Comité no haya recibido ninguna información al respecto.

12. En general las autoridades peruanas han optado por hacer uso de la fuerza para responder a las diferentes formas de violencia. Desde 1983 se ha proclamado más de 80 veces el estado de emergencia. La delegación peruana reconoció que la Constitución había sido parcialmente suspendida, pero la Sra. Chanet sigue sin saber cuáles de sus disposiciones siguen vigentes y cuáles no. Además, es evidente que la suspensión de la Constitución no se ha efectuado con arreglo al procedimiento previsto por ese texto, y que tampoco fue objeto de una consulta popular. Cabe dudar, además, de que en el Perú tengan base jurídica los derechos consagrados en el Pacto. La delegación peruana señaló que esa base jurídica era el Decreto-ley N° 25.418. Ahora bien, ese Decreto-ley se promulgó al margen de la Constitución y puede considerarse nulo e írrito en virtud precisamente del artículo 82 de la Constitución. Algunos elementos positivos, como la creación de un registro de desaparecidos, se fundamentan, sin embargo, en una base legislativa dudosa. Por ejemplo, el Decreto-ley N° 25.592, que, según parece, fue adoptado por delegación del Congreso en junio de 1992, fecha en la que el Congreso ya había sido disuelto. Esta situación resulta tanto más preocupante cuanto que, durante el examen del segundo informe periódico (CCPR/C/51/Add.4, 5 y 6), los miembros del Comité descubrieron violaciones flagrantes de varios artículos del Pacto, especialmente de los artículos 6 y 7. Las imágenes mostradas por la delegación peruana contribuyeron a ilustrar no solamente la violencia reinante en el Perú sino también la incapacidad de las autoridades para acabar con ella. Lo mismo cabe decir del reconocimiento oficial de las milicias rurales, que contribuye a crear un clima de tensión y un engranaje de violencia e hipoteca en gran medida la aplicación del artículo 6 del Pacto. En lo que respecta a las obligaciones que pueden suspenderse, en virtud del artículo 4 del Pacto, por ejemplo las contraídas de conformidad con los artículos 9 y 14, convendría saber exactamente qué disposiciones han sido suspendidas. En cuanto al hábeas corpus, parece ser que ese recurso está en vigor y que jamás ha sido suspendido; sin embargo, teniendo en cuenta los obstáculos con que tropiezan

las personas que desean hacer uso de él se podría decir que, a partir del 5 de abril, perdió completamente su validez. Por lo que respecta al artículo 14 del Pacto, y especialmente a la independencia del poder judicial, la Sra. Chanet considera que la suspensión de los tribunales y el cerco puesto a los palacios de justicia no son las medidas más adecuadas para garantizar la independencia prevista en ese artículo. Tampoco está segura de que la sustitución de los magistrados llevada a cabo por el Gobierno de excepción fuera del marco de la Constitución, sea un augurio para la imparcialidad y la independencia de las nuevas jurisdicciones que se han implantado.

13. La Sra. Chanet cree entender que está prevista la celebración de elecciones en el mes de noviembre y que las autoridades consideran que la situación actual es meramente coyuntural. Se suma, por tanto, a los demás miembros del Comité que han manifestado el deseo de un pronto retorno a una situación democrática que garantice el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto.

14. El Sr. ANDO da las gracias al Gobierno del Perú por haber respondido en su informe complementario a las preguntas planteadas por los miembros del Comité, y también agradece a la delegación peruana las respuestas facilitadas oralmente. Comparte, sin embargo, las preocupaciones expresadas por muchos miembros del Comité. Sigue preguntándose qué papel desempeña la Constitución, porque no ha quedado suficientemente aclarado, así como tampoco las razones que han llevado a tantos miembros de la policía y del ejército a cometer abusos de poder. Le preocupa también que no esté garantizada la independencia del poder judicial. Además, le parece que el Gobierno, para luchar contra los actos de brutalidad llevados a cabo por los grupos terroristas, debería abstenerse de aplicar a su vez medidas de represión aparentemente contrarias a la ley. Es verdad que la instauración de una verdadera democracia, así como también la implantación de nuevas estructuras económicas y sociales indispensables para el respeto de los derechos humanos exigen a la vez valor y paciencia, pero es de esperar que las autoridades peruanas se adentren resuelta y rápidamente por esa vía, especialmente en el marco de los preparativos para una nueva constitución. El Sr. Ando confía, por tanto en que en el tercer informe periódico se puedan exponer satisfactoriamente los resultados de los esfuerzos realizados por el Gobierno peruano para mejorar la protección y asegurar la defensa de los derechos humanos.

15. El Sr. EL SHAFEI ha seguido con gran interés el diálogo entablado con la delegación peruana, que se ha esforzado por describir lo mejor posible cuál es la situación en su país en lo tocante al respeto de los derechos y las libertades consagradas en el Pacto. Pero le siguen preocupando algunas cuestiones. En efecto, la situación de violencia generalizada y la utilización brutal de la fuerza por los grupos terroristas colocan al Gobierno en una posición extremadamente delicada. En efecto, éste debe luchar contra los actos de terrorismo, velando al mismo tiempo por el respeto de la legalidad y la aplicación de la Constitución, de la legislación nacional y de los instrumentos internacionales. Pero, el Sr. El Shafei duda de que muchos gobiernos enfrentados a este mismo tipo de situación hubiesen reaccionado como lo hizo el Gobierno peruano en abril de 1992, es decir proclamando el estado de emergencia, dictando la orden de disolución del Parlamento y concentrando toda la autoridad en el poder ejecutivo. Sorprenden, además, las medidas

suplementarias de carácter extraordinario tomadas por el Gobierno peruano, que decidió suprimir la totalidad de los tribunales civiles y el ministerio público, además de destituir de sus funciones a todos los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, a 13 jueces de la Corte Suprema y a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, así como también al Fiscal General, al Fiscal Especial de Defensa de los Derechos Humanos, y a más de 120 magistrados y fiscales. Además, parece ser que, en la práctica, el recurso de amparo, entre otros derechos, está suspendido. Ante una situación semejante el Comité podría esperar con toda la razón que la delegación peruana explicase los motivos que justificaron la adopción de esas medidas tan extraordinarias que han puesto en grave peligro las estructuras y mecanismos que utilizan los Estados para velar por la protección de los derechos humanos. Es lamentable que la delegación peruana no haya dado ningún detalle sobre las causas de que se suprimieran las principales garantías de la independencia del poder judicial.

16. La delegación peruana no ha indicado tampoco si las medidas tomadas después del mes de abril de 1992 habían contribuido concretamente a reducir la cifra de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales y de asesinatos. En otras palabras, no ha ofrecido ningún elemento de información que permita concluir que las "reformas" impuestas en abril de 1992 hayan contribuido a normalizar la situación en el país. De todas maneras, incluso admitiendo que la situación actual sea el resultado de largos años de insurrección y de contrainsurrección durante los cuales las partes en conflicto no han dejado de recurrir a la fuerza, habría que considerar que siguen vigentes determinados instrumentos internacionales, por ejemplo los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

17. El Comité habría deseado contar con mayor información sobre las dificultades con que ha tropezado el Gobierno peruano en sus esfuerzos por garantizar el respeto de los derechos y las libertades consagrados en el Pacto. El Sr. El Shafei espera que la delegación peruana comunique a las autoridades de su país las observaciones formuladas por los miembros del Comité y las preocupaciones que pusieron de manifiesto, en el marco de un intercambio de opiniones que el Comité confía en que haya sido sincero y cuyo solo fin es contribuir en lo posible a la mejora de la situación de los derechos humanos en el Perú.

18. El Sr. Aguilar Urbina ocupa la Presidencia.

19. El Sr. MULLERSON agradece a la delegación peruana los esfuerzos realizados para responder a las numerosas preguntas de los miembros del Comité, lo que ha servido para captar mejor la realidad de la situación en ese país y formarse una idea más exacta de la posición del Gobierno peruano. Evidentemente es difícil combatir simultáneamente en varios frentes contra grupos terroristas, traficantes de drogas y culpables de ejecuciones sumarias, de desapariciones y de torturas. Sin embargo, convendría hacer de nuevo hincapié en que las atrocidades cometidas por los opositores al Gobierno no justifican en modo alguno el terrorismo de Estado que no sirve, por el contrario, sino para crear una cantera de futuros adeptos del terrorismo.

20. La delegación peruana no ha indicado qué disposiciones de la Constitución invocó el Presidente Fujimori para disolver el Parlamento y suspender el funcionamiento de todo el sistema judicial. Además, el Sr. Müllerson observa que, si bien el Gobierno ha tomado severas medidas de represión contra grupos terroristas y traficantes de drogas, reina la impresión de que algunos grupos actúan con cierta impunidad y que el Gobierno no puede o no quiere sancionar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

21. El Sr. Müllerson espera que la delegación peruana comunique al Gobierno las preocupaciones expresadas al respecto por los miembros del Comité.

22. El Sr. Pocar vuelve a ocupar la Presidencia.

23. La Sra. HIGGINS da las gracias al Gobierno peruano por haber atendido la solicitud del Comité y haberle remitido una adición al segundo informe periódico. También se congratula de la seriedad de las respuestas orales de la delegación peruana.

24. El Gobierno peruano tiene, sin ninguna duda, toda la razón para desear eliminar el terrorismo que reina en el país antes de dedicarse plenamente a restablecer el respeto de los derechos humanos, y hay que alabar las medidas tomadas por el Presidente Fujimori para sancionar a los autores de violaciones, sea entre los grupos terroristas o entre las mismas fuerzas gubernamentales.

25. La Sra. Higgins deplora que el informe complementario presentado por el Gobierno peruano contenga tan poca información sobre la aplicación de los artículos 6, 7 y 9 del Pacto y que el Gobierno no haya facilitado respuestas completas a las preguntas planteadas por el Comité durante el anterior período de sesiones. Es muy de lamentar que el Gobierno no haya respondido a las peticiones de información del Relator Especial del Comité sobre las Comunicaciones Nos. 203/1986 y 209/1986, referentes a casos que afectan al Perú, lo que hace dudar de las intenciones de este país en lo tocante a la promoción de los derechos humanos, siendo así que ha aceptado voluntariamente la competencia del Comité para tratar las comunicaciones dirigidas a este último. Por otra parte, la delegación peruana no ha señalado con precisión si siguen suspendidos los derechos consagrados en los artículos 9, 12, 17 y 21 del Pacto y si la disolución de ciertas instituciones judiciales se ha llevado a cabo conforme a las disposiciones del artículo 14 del Pacto. Sin embargo, antes incluso de los cambios ocurridos en abril de 1992, a la Sra. Higgins le preocupaba que los miembros de las fuerzas militares siguieran sometidos a la jurisdicción militar cuando cometiesen delitos comunes, así como también la aparente lenidad de la sanción que recaía sobre quienes habían sido declarados culpables de delitos graves. También le preocupaba ya el elevado número de personas detenidas en establecimientos penitenciarios en espera de sentencia, a veces en condiciones inhumanas, y ésta es una inquietud que no se ha disipado. Después del 5 de abril de 1992 parece que la independencia del poder judicial quedó gravemente en entredicho y que también se produjeron detenciones arbitrarias de políticos. La Sra. Higgins desea que el Gobierno peruano tenga debidamente en cuenta las observaciones de los miembros del Comité.

26. El Sr. HERNDL considera que para que el diálogo iniciado entre el Estado Parte y el Comité sea fructífero es menester que el gobierno interesado admita en todo su valor, y no como simples objeciones, los argumentos y las observaciones de los miembros del Comité. Espera, por tanto, que el Gobierno peruano introduzca ciertas modificaciones en su legislación, y en su manera de abordar algunos problemas relativos a los derechos humanos, teniendo en cuenta lo que se ha dicho en el Comité. Es cierto que los miembros del Comité se hacen cargo de la postura del Gobierno peruano cuando alega que la presencia de grupos terroristas violentos constituye sin duda un factor que influye en el respeto de los derechos humanos en todo el país. Pero no se combate al terrorismo con terrorismo de Estado. Por consiguiente, el Sr. Herndl confía en que, cuando se adopten medidas antiterroristas, el Gobierno peruano tome en consideración los derechos inherentes a la persona humana consagrados en el Pacto.

27. Los derechos que preocupan especialmente al Comité son los reconocidos en los artículos 6 y 7 del Pacto, es decir el derecho a la vida y el derecho a la protección contra la tortura, pero también los plasmados en el artículo 14; en efecto, en el Perú el funcionamiento del sistema judicial está absolutamente bloqueado, cuando precisamente es indispensable una buena administración de justicia para el ejercicio de los derechos humanos. El Gobierno peruano presentó, a petición del Comité, informaciones complementarias y un informe adicional, pero los datos que figuran en esos documentos son muy sucintos. El Comité se ha enterado de que la Constitución está parcialmente suspendida, como así también las instituciones democráticas, pero le faltan detalles sobre el marco jurídico en el que se inscriben estas medidas.

28. Es de esperar que se restablezca la democracia lo más rápidamente posible en el Perú. En ese sentido, se han tomado algunas medidas iniciales, y se ha fijado una fecha para las elecciones, que se celebrarán en noviembre. Pero el Sr. Herndl desea sobre todo que el Perú vuelva al sistema del multipartidismo y también, dada la situación extremadamente preocupante de los derechos reconocidos en el artículo 6 del Pacto, que las autoridades ejerzan un mayor control sobre las fuerzas de seguridad, que se reduzcan las atribuciones excesivas de los tribunales militares y, por último, que el país se encamine rápidamente hacia la normalidad.

29. El Sr. Herndl no duda de que el Gobierno tenga la voluntad de restablecer lo más pronto posible una situación que se ajuste a las disposiciones del Pacto. A este respecto aguarda con interés la creación de una comisión de derechos humanos en el Perú, que podría ayudar al Gobierno a seguir la evolución de los hechos en esa esfera. Pero es absolutamente necesario poner término a las aberraciones actuales y, especialmente, controlar las "rondas campesinas", que también son responsables de gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales, de masacres e incluso de torturas.

30. El Sr. SADI llega, por su parte, a la conclusión de que en el Perú está suspendida la aplicación del Pacto en general. Es cierto que estas medidas fueron tomadas por razones graves relacionadas con el terrorismo y la violencia, pero es de esperar que el país vuelva rápidamente a la legitimidad y al respeto de las disposiciones del Pacto. Es necesario, en particular, que las autoridades redupliquen sus esfuerzos por encontrar el rastro de las

personas desaparecidas y poner fin a las ejecuciones extrajudiciales. Por último, el Sr. Sadi desearía que se indemnizara a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, aspecto que suele quedar relegado al olvido.

31. El Sr. AGUILAR URBINA lamenta, en primer lugar, que algunas de sus preguntas sólo hayan recibido una respuesta parcial, y que muchas de ellas no hayan tenido respuesta. Por ejemplo, sigue sin saber cuáles son las normas constitucionales que se usaron para modificar sin control los poderes del Estado que no fueran el Poder Ejecutivo. A la pregunta de cuáles eran las normas del Pacto que habían sido suspendidas, le respondieron lacónicamente que sólo las que no admiten suspensión no habían sido suspendidas. Además, no se sabe qué ha ocurrido con los derechos enunciados en el artículo 14 del Pacto, pero parecerían haber sido suspendidos también, al igual que los del artículo 25.

32. En estas condiciones, el Sr. Aguilar Urbina se inclina a pensar, como el Sr. Sadi, que ha habido una suspensión total del Pacto porque ha habido una suspensión total de la Constitución. Actualmente el Perú se rige por las disposiciones del Decreto-ley N° 25.418, redactado en términos muy vagos, y está suspendida la aplicación de la Constitución, de las leyes y del Pacto. Además, en contestación a la pregunta formulada por la Sra. Higgins con respecto al recurso de hábeas corpus, la delegación peruana respondió, por una parte, que jamás había sido suspendido, y por otra, que a algunas personas se les había denegado el derecho a interponer este recurso. Se puede uno preguntar sobre la diferencia que existe entre impedir que una persona ejerza el derecho de hábeas corpus y suspenderlo. No se sabe a ciencia cierta cuáles son las normas legales en vigor ni existen garantías de su aplicación. Efectivamente, la delegación peruana no ha aclarado qué normas constitucionales se han suspendido. Por lo tanto, el Perú ya no es un Estado de derecho.

33. Entre los temas que preocupan especialmente a los miembros del Comité, en este caso figuran evidentemente la actuación de los militares, el fenómeno de las desapariciones y las ejecuciones sumarias y extrajudiciales. El Sr. Aguilar Urbina, que es centroamericano, recuerda que los países de su región están saliendo de un período sombrío, caracterizado por esos mismos fenómenos. Y están saliendo porque comprendieron que la única manera de luchar contra la subversión era elegir la vía de la paz, y sobre todo fomentar un desarrollo verdaderamente humano. El fenómeno de las milicias campesinas también existe en América Central, con las patrullas de defensa civil, en Guatemala, donde se cometen las mismas atrocidades. Esto sucede porque se permite que los particulares desempeñen una función que corresponde al Estado y porque estos particulares no tienen conciencia de sus propios derechos y menos de los derechos de terceras personas. Ahora bien, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mientras las milicias campesinas no respeten el derecho de los demás, ofrecerán un terreno propicio a las actividades de grupos terroristas, como por ejemplo, Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

34. No se combate la violencia con la violencia, sino con medios pacíficos, con instrumentos jurídicos, los de la democracia y no los del ejército. El diálogo que se ha entablado entre el Comité y el Estado Parte tiene por fin buscar los medios que permitan ejercer en la práctica los derechos humanos. En América Central hay países que saben lo que es la violencia, que han aprendido que responder a la violencia con la violencia es un método abocado al fracaso y que están dispuestos a compartir con el Perú sus experiencias.

35. Por su parte, el Sr. Aguilar Urbina está especialmente preocupado por las consecuencias del golpe de Estado ya que ha acarreado una serie de graves incumplimientos de las disposiciones del Pacto. Por ejemplo, el Poder Judicial, que cuando es independiente constituye la garantía de la aplicación del Pacto, ha sido desmantelado: 30 fiscales han sido expulsados, el Fiscal General de la Nación renunció al cargo en señal de protesta, 137 magistrados y jueces, incluidos 16 jueces de la Corte Suprema, fueron suspendidos en sus funciones y 3 renunciaron. Además se promulgan leyes con efecto retroactivo, lo que demuestra a las claras que ya no existe el Estado de derecho. Es el caso del Decreto-ley N° 25.454, que suspende la aplicación de las condiciones necesarias para ser juez establecidas en virtud de una ley orgánica anterior, y que fue promulgado con el único fin de regularizar retroactivamente los nombramientos efectuados por el Presidente Fujimori para sustituir a los jueces destituidos. En cuanto a estos últimos, se les prohibió presentar recurso de amparo para impugnar su destitución. Dicho Decreto constituye una violación no sólo del espíritu, sino también de la letra del Pacto.

36. Por último, el Sr. Aguilar Urbina, señala que, al igual que la Sra. Higgins, había planteado una serie de preguntas sobre los casos estudiados por el Comité en las comunicaciones Nos. 203 y 209 de 1986, pero no ha recibido respuesta alguna. El orador hace suyas las observaciones formuladas por la Sra. Higgins a este respecto.

37. Y para concluir, el Sr. Aguilar Urbina declara que la situación del Perú en este momento es un tema que le preocupa a él que, como viene también de un país de América Latina, se siente solidario de los peruanos en las pruebas por las que atraviesan. Es cierto que los actos de salvajismo que cometen los terroristas equivalen a veces a un genocidio. Poner una bomba en un mercado no es ya un acto de intimidación, es un asesinato en masa. Hay que castigar, por lo tanto, a los responsables de tales actos, y con energía, pero respetando las garantías previstas por la ley y cumpliendo las normas de derecho internacional que el Perú se ha comprometido a respetar, especialmente al firmar el Pacto. La delegación peruana puede contar con la solidaridad de los países de América Latina, que rechazan rotundamente a los grupos terroristas y están dispuestos a compartir con el Perú los frutos de su experiencia en la materia.

38. El Sr. DIMITRIJEVIC espera que la delegación peruana haya sabido ver en las preguntas planteadas por los miembros del Comité la expresión de una inquietud real ante la situación extremadamente difícil del país. Pero la delegación no podía colmar sola todas las lagunas del informe. El Sr. Dimitrijevic confiaba en que este segundo encuentro ofrecería al Gobierno peruano la ocasión de exponer las dificultades por las que atraviesa para hacer aplicar el Pacto, como está previsto en el párrafo 2 de su artículo 40.

Pero leyendo el informe complementario del Perú, el Comité descubre un poder ejecutivo que habla de "la superficialidad" de la democracia peruana y que busca excusas en el caos, la corrupción y la indiferencia, de los que hace responsables al poder legislativo, al poder judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal de Garantías Constitucionales, al ministerio público y a la Contraloría General de la República (CCPR/C/51/Add.6, párr. 2). Parecería que todas las instituciones del país, con excepción del Presidente, fuesen responsables de la situación actual. En esas condiciones es difícil que el Comité pueda entablar un debate, pues se vería obligado a tomar posición sobre las acusaciones formuladas por el Gobierno.

39. Pero hay cosas más curiosas todavía. La delegación peruana se queja de los daños cometidos por las principales organizaciones terroristas, daños que ha tratado de ilustrar a través de la cinta de video que los miembros del Comité han podido ver la víspera. Ahora bien, el informe del Perú es paradójico, porque contiene a la vez críticas dirigidas contra el movimiento Sendero Luminoso y Tupac Amaru y un panorama absolutamente negativo de la situación en el país, donde nada parece funcionar, una descripción tan tenebrosa que bien podría haber sido hecha por dichos movimientos. Según el informe, pues, una situación tan mala desembocaba sin remedio en un golpe de Estado, en la suspensión de la mayoría de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, así como en la suspensión del funcionamiento de las instituciones.

40. Esta forma de presentar las cosas no ayuda a aclarar los problemas del Perú, que radican no solamente en el terrorismo, sino también en lo que podría denominarse "movimientos de cólera", totalmente irracionales, dotados de medios poderosos y dirigidos por dementes. Hay que tratar de comprender por qué se ha llegado a esta situación y cómo ponerle fin, pero el contenido del informe no hace ninguna de las dos cosas, así como tampoco se hace eco de la voluntad del poder público de resolver los problemas actuales. Además, la historia enseña que cuando se pretende salvar la democracia por vías no democráticas las cosas terminan mal.

41. Si se hubiese logrado entablar un debate serio sobre el terrorismo, el Comité habría podido aludir a la experiencia de otros países que han padecido problemas análogos y que los han resuelto de forma democrática. Esta no parece ser la intención del Gobierno peruano, a juzgar por todas las medidas que ha tomado después del golpe de Estado, y, especialmente, los numerosos decretos ejecutivos. Es imposible que esos decretos se ajusten al artículo 14 del Pacto y es dudoso que la organización de elecciones en noviembre próximo garantice el respeto del artículo 25. Es probable en efecto, que desemboquen en la instauración de un parlamento y en órganos análogos a los que el Presidente de la República del Perú juzga ineficaces.

42. No dejan de asombrar las protestas del Gobierno peruano contra los órganos de defensa de los derechos humanos que reclaman el respeto de esos derechos para todas las personas. Cada vez que el Comité ha escuchado las protestas de un Gobierno contra la petición de que se aplique el Pacto en el caso de terroristas, ha respondido que si bien la gravedad de los actos de terrorismo justifica una represión enérgica y penas elevadas, no por ello las

personas sancionadas deben dejar de disfrutar de las garantías previstas en el Pacto. Los terroristas encarcelados tienen derechos, en Perú y en todas partes. La película que se proyectó en el Comité mostraba que la falta de control en las cárceles permite a los detenidos actuar de una forma inconcebible en un establecimiento penitenciario que normalmente está bajo la autoridad del poder ejecutivo.

43. El Sr. Dimitrijevic recoge todas las preocupaciones expresadas por los demás miembros del Comité, y agrega simplemente que lamenta que los informes complementarios no hayan dado al Comité la oportunidad de desempeñar su función, que consiste en ayudar al Estado Parte a buscar soluciones a una situación extremadamente difícil. El Comité lo lamenta más aún porque conoce perfectamente la gravedad de la situación y compadece a las innumerables víctimas del terrorismo, pero también compadece a las víctimas de las medidas de represión irresponsables y ciegas que engendran nuevas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. El razonamiento pernicioso que parece aplicar actualmente el Gobierno peruano, según el cual en un país se puede imponer legítimamente un régimen dictatorial si se cuenta con el apoyo temporal de la mayoría y si se tiene el propósito de instaurar una democracia, siempre ha dado hasta ahora resultados desastrosos. El Gobierno peruano debe saber que el Comité espera que dé pruebas de su sentido de la responsabilidad y del espíritu democrático necesarios para poner fin a la tragedia de la población peruana.

44. El PRESIDENTE reconoce los esfuerzos realizados por la delegación peruana para responder a las preguntas que se le han formulado, tarea dificultada porque la base del diálogo, es decir los informes, era muy endeble. El Comité lamenta a menudo que, en los informes periódicos falta información sobre la situación concreta, lo que contrasta con la abundancia de información de orden jurídico y legislativo. Sin embargo en este el caso no ocurre así y, pese al nuevo plazo concedido al Gobierno peruano para presentar sus respuestas por escrito, no queda más remedio que reconocer que una serie de preguntas relativas a la situación legal y jurídica quedaron sin respuesta. La delegación peruana ha facilitado aclaraciones muy importantes pero que no bastaron para dar al Comité una idea clara de la situación, así que el Presidente no puede sino compartir las preocupaciones y la decepción expresadas por los miembros del Comité.

45. El Comité tiene plena conciencia de que una situación tan difícil como la del Perú requiere la adopción de medidas especiales, que pueden traducirse en suspensión de ciertos derechos consagrados en el Pacto. Acepta ese estado de cosas, pero a condición de que las suspensiones se mantengan dentro de los límites fijados por el artículo 4 del Pacto, lo que no parece ser el caso del Perú. No basta con afirmar que el párrafo 2 del artículo 4 se respeta plenamente. El artículo 4 prevé que los Estados Partes pueden adoptar disposiciones que "en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación" suspendan las obligaciones contraídas en virtud del Pacto, "siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional", razón por la cual los Estados Partes deben informar inmediatamente al Secretario General. Que el Comité sepa, tampoco se cumplió con esta condición. Una laguna semejante, unida a la falta de reacción del Gobierno peruano ante las comprobaciones realizadas por el

Comité tras el examen de las comunicaciones dirigidas a este último en virtud del Protocolo Facultativo, ponen en duda la voluntad de cooperación de las autoridades peruanas.

46. El Comité tomó nota de las numerosas declaraciones del Presidente del Perú en que se comprometía a respetar los derechos humanos, y desea que las elecciones de noviembre abran paso a una nueva era en que ello se cumpla; si esa aspiración se materializa, el Gobierno peruano tendrá que asumir otras obligaciones en materia de derechos humanos, la primera de las cuales será la de garantizar una indemnización a las víctimas.

47. El Comité confía en que el tercer informe periódico sea más satisfactorio en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, y transmite al Gobierno peruano, por conducto de su delegación, la seguridad de que, sus palabras, a menudo críticas, sólo están guiadas por el deseo de ayudar al Gobierno a mejorar la situación.

48. El Presidente recuerda que el tercer informe periódico del Perú debe ser presentado el 9 de abril de 1993, fecha bastante cercana, dada la demora importante con la que se envió el segundo informe, pero espera que llegue dentro del plazo.

49. La Sra. LINARES ARENAZA (Perú) da las gracias a los miembros del Comité por sus observaciones y sugerencias tan importantes. No dejará de remitirlas inmediatamente a las autoridades competentes para que tomen las disposiciones necesarias a fin de mejorar, no solamente la calidad del próximo informe periódico, sino también, y sobre todo, la aplicación del Pacto.

50. Evidentemente, es difícil transmitir las dificultades que encuentra el Gobierno peruano en la aplicación del Pacto, dada la situación de extrema violencia que reina en el país, pero sería erróneo considerar que todas las disposiciones del Pacto están suspendidas en el país.

51. En nombre del Gobierno peruano, la delegación agradece al Comité la asistencia que se ha ofrecido a proporcionar, y le solicita su ayuda para elaborar el próximo informe periódico. Espera que el Comité interprete su presencia como prueba de la firme voluntad del Gobierno peruano de cooperar con él, pese a todas sus dificultades actuales.

52. El PRESIDENTE anuncia que el Comité ha terminado el examen del segundo informe periódico del Perú.

53. La delegación peruana se retira.

Se levanta la sesión (pública) a las 12.25 horas.